

EDITORIAL

Constitución ecológica. Aprendizaje del proceso constituyente chileno

Pilar Moraga Sariego 

Directora

El proceso constituyente iniciado luego del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, alcanzado en el Congreso Nacional de Chile el 15 de noviembre de 2019,¹ inició el debate para la elaboración de una «Constitución ecológica» en el país, del cual es posible recoger importantes lecciones sobre cómo abordar la cuestión ambiental en el siglo XXI. Se trata de bases mínimas que será necesario considerar en la elaboración de una nueva Constitución.

Al respecto, cabe mencionar la denominación de *Constitución ecológica* obedece a una característica regional, latinoamericana (Colombia, Ecuador, Bolivia) que ciertos autores han considerado «un modelo alternativo» (Esborras, 2016). En el caso chileno, esta se explica por el tratamiento que tuvo la relación del ser humano con su entorno en el proceso constituyente y en el texto de «nueva Constitución» sometido a plebiscito en septiembre de 2022.

En efecto, según datos levantados por el Observatorio Constitucional Ambiental,² de los 155 constituyentes electos, 122 plantearon en sus programas alguna propuesta relacionada con la protección o cuidado del medio ambiente, la naturaleza, sus elementos, los ecosistemas y su interacción con los seres humanos. Por su parte, la Convención Constitucional, manifestó, de manera temprana, encontrarse en «Estado de Emergencia Climática y Ecológica», declaración que fue aprobada por 137 votos de un total de 155.³ Esta iniciativa, impulsada por los convencionales ecoconstituyentes, proponía en primer lugar: «reconocer que la nueva Constitución se escribe en un contexto de Emergencia Climática y Ecológica», lo que debe tenerse presente en todas las comisiones y propuestas que se elaboren. Al mismo tiempo, esta pro-

1. El texto se encuentra disponible en <https://bit.ly/3hDul9D>.

2. El sitio del Observatorio se encuentra disponible en <https://bit.ly/3FFUmwS>.

3. Ello se encuentra en la sesión 27.º del 5 de octubre 2021. Disponible en <https://bit.ly/3VgQLuT>.

pone «implementar de manera plena la petición de la Convención Constitucional Sustentable, adherida por 118 convencionales en ejercicio, a modo de resguardar que la Convención Constitucional sea sustentable en su funcionamiento». Esto significó, que las siete comisiones debían abordar, de manera transversal esta temática, lo que puede considerarse la primera lección aprendida del proceso constituyente chileno,⁴ por el hecho de reconocer que la cuestión ecológica no puede considerarse de manera aislada respecto de otras materias. Así, por ejemplo, se asumió que el equilibrio ecológico es una condicionante del ejercicio de otros derechos, al mismo tiempo que, el tipo de organización del Estado es determinante en la eficacia de la protección ambiental y de la naturaleza. Aquello, traería consigo una importante consecuencia para la propuesta constitucional, pues tal como lo analizaremos más adelante la cuestión ecológica fue un eje transversal en el texto sometido a plebiscito.

Al mismo tiempo, el mecanismo de toma de decisiones en dos instancias: las comisiones y el pleno, previa audiencia de terceros que solicitaron ser escuchados, permitió pulir los primeros textos, caracterizados por el gran detalle de las normas elaboradas, redundancias y falta de efecto concreto, para los fines de protección, gestión o tratamiento de la cuestión ambiental. El rechazo de las propuestas formuladas por la Comisión de Medio Ambiente en el pleno permitió una mejora sustantiva en términos de coherencia y eficacia normativa.

En cuanto al texto mismo propuesto por la Convención Constitucional, es posible destacar una segunda lección referida al desarrollo de un «núcleo ecológico», que encuentra su concreción en un conjunto de normas que constituyen un «eje ecológico transversal», la tercera lección aprendida que podemos destacar.

Por «núcleo ecológico», nos referimos al reconocimiento de «lo ecológico» como un elemento que caracteriza al Estado de Chile, el cual reconoce la interdependencia de los seres humanos y la naturaleza y promueve su relación armónica y de buen vivir.⁵ Con ello, pasamos de la preeminencia del enfoque antropocéntrico, en el texto

4. 1. Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral; 2. Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía; 3. Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal; 4. Comisión de Derechos Fundamentales; 5. Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico; 6. Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional; 7. Comisión sobre sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes y patrimonios

5. Propuesta de la Convención Constitucional: «Artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. [...] Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza [...]. Artículo 8. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad».

constitucional actual, a una convivencia entre este y el enfoque ecocéntrico, que se concreta en la consagración, por una parte, del derecho a vivir en un ambiente sano y, por otra, de los derechos de la naturaleza.⁶

Por «eje ecológico estructural» nos referimos a las normas que abordan la «cuestión ecológica» en los diversos capítulos de texto de nueva Constitución, en materia de i) principios: progresividad, precautorio, preventivo, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa; ii) derechos: derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Derecho al aire limpio durante todo su ciclo de vida. Derechos de acceso en materia ambiental: participación, información y a la justicia; y iii) deberes: la naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. El Estado debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. El Estado tiene un deber especial de custodia sobre los bienes comunes naturales, con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Es deber del Estado la conservación, la preservación y el cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antártico, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos y asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica.

Todo esto se vincula también al desarrollo de materias específicas como el estatuto de las aguas y de los minerales, la función social y ecológica de la propiedad, así como las definiciones orgánicas. Respecto de este último punto, podemos destacar la definición de las competencias ambientales de los órganos del Estado, en particular, el fortalecimiento de la autonomía a nivel de región y comuna, lo cual es necesario para una mejor gobernanza ambiental, en la medida que se provea de las capacidades humanas y económicas para cumplir con el mandato constitucional encomendado. En este sentido, el texto constitucional propuesto también abordó los mecanismos de acceso a la justicia en materia ambiental al definir la acción de tutela de derechos fundamentales y de la naturaleza, al mismo tiempo que creó la Defensoría de la Naturaleza.

6. Propuesta de la Convención constitucional: «Artículo 127.1. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. 2. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes».

Ahora, muchos especialistas del medio nacional e internacional se podrán interrogar, con justa razón, sobre la pertinencia de pretender obtener un aprendizaje de un proceso aparentemente fallido, dado el rechazo de la propuesta constitucional en el plebiscito por el 62%. Las respuestas a lo anterior se pueden encontrar en el amplio consenso existente sobre la necesidad de contar con un nuevo tratamiento de la cuestión ecológica, que sea coherente con la situación planetaria actual, lo que nos permite considerar que se trata de un valor compartido por la sociedad chilena. Al mismo tiempo, es necesario subrayar que el rechazo del texto propuesto por la Convención Constitucional en el plebiscito de septiembre 2022 no sepulta el proceso constituyente, que en momentos en los que se escribe esta editorial, se reactiva, fruto de un nuevo acuerdo político: «Acuerdo por Chile». Este último, confirmando la perspectiva que se plasmó en la propuesta de nueva Constitución, propone una reforma constitucional que contenga «el cuidado y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad» en sus bases.

A modo de conclusión, es posible afirmar que la propuesta relativa al tratamiento constitucional de la relación entre sociedad y naturaleza, inserta en el texto de nueva Constitución, puede considerarse, a juicio de esta autora, como el mínimo civilizatorio para enfrentar la crítica situación ambiental y climática de los próximos cincuenta años, de un país especialmente vulnerable como Chile.

Referencia

ESBORRÁS, Davis Fabio (2016). «El modelo ecológico alternativo latinoamericano entre protección del derecho humano al medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la naturaleza». *Revista Derecho del Estado*, 36: 93-129 DOI: [10.18601/01229893.n36.04](https://doi.org/10.18601/01229893.n36.04).

Sobre la autora

PILAR MORAGA SARIEGO es profesora titular de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, directora del Centro de Derecho Ambiental y subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Abogada de la Universidad de Chile. Máster en Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lille2-Francia y doctora en Derecho por la misma universidad. Su correo electrónico es pmoraga@derecho.uchile.cl.  <https://orcid.org/0000-0001-8847-8559>.

EDITORIAL

Ecological Constitution. Learning from the Chilean constituent process

Pilar Moraga Sariego 

Directora

The constituent process launched after the Agreement for Peace and the New Constitution reached by the National Congress of Chile on November 15, 2019,⁷ kicked off a country-wide debate on drafting an «Ecological Constitution» from which important lessons can be drawn on how to address the environmental issue in the 21st century. These are minimum foundations that will have to be included when drafting a new Constitution.

The term «Ecological Constitution» reflects a regional characteristic of Latin America (Colombia, Ecuador, Bolivia) that some authors have considered to be «an alternative model» (Esborras, 2016). In the case of Chile, the term is explained by the treatment afforded to the relationship between human beings and their environment in the constituent process and in the text of the «new Constitution» submitted to a referendum in September 2022.

In fact, according to data collected by the Environmental Constitutional Observatory,⁸ of the 155 elected constituents, 122 included at least one proposal in their programs on the protection or care of the environment, nature, its elements, ecosystems, and the interaction between the environment and human beings. For its part, the Constitutional Convention declared a «State of Climate and Ecological Emergency» early on, a declaration that was approved by 137 votes out of a total of 155.⁹ This initiative, put forward by the eco-constituent members of the Convention, proposed, first of all: «To acknowledge that the new Constitution is being written in the context of a Climate and Ecological Emergency,» to be borne in mind in the development of all committees and proposals. At the same time, it proposed «fully implementing the

7. The text is available at <https://bit.ly/3hDul9D>.

8. The Observatory's website is available at <https://bit.ly/3FFUmwS>.

9. This is found in the 27th Session, held on October 5, 2021. The text is available at <https://bit.ly/3VgQLuT>.

petition of the Sustainable Constitutional Convention, adhered to by 118 incumbent Convention members, in order to ensure that the Constitutional Convention operates in a sustainable manner». This meant that the seven committees had to transversally address this issue, which can be considered the first lesson learned from the Chilean constituent process,¹⁰ in recognizing that the ecological issue cannot be approached in isolation from other matters. Thus, for example, ecological balance was assumed to be a conditioning factor in the exercise of other rights while the type of State organization was a determining factor in the effectiveness of environmental protection and the protection of nature. This would have important consequences for the proposed Constitution, since the ecological issue was a cross-cutting theme in the text submitted to the referendum.

At the same time, the two-tier decision-making mechanism—the committees and the plenary, after hearing third parties who requested to be heard—made it possible to polish the initial texts, which were marked by the depth of detail of the norms drafted, but were also plagued with redundancies and lacked concrete effect for the purposes of protecting, managing, or addressing the environmental issue. The rejection of the proposals put forward by the Committee for the Environment in the plenary session led to a substantial improvement in terms of regulatory coherence and effectiveness.

As for the actual text proposed by the Constitutional Convention, there is a second lesson to be learned in terms of the development of an «ecological core», embodied in a set of norms that constituted a «structural ecological axis», the third lesson learned that we could highlight.

By «ecological core», we mean the recognition of «the ecological» as an element that characterizes the State of Chile, which recognizes the interdependence of human beings and nature and promotes their harmonious relationship and well-being.¹¹ With this, we move from the preeminence of the anthropocentric approach in the

10. 1. Political System, Government, Legislative Branch, and Electoral System; 2. Constitutional Principles, Democracy, Nationality, and Citizenship; 3. Committee for the Form of State, Legal System, Autonomy, Decentralization, Equity, Territorial Justice, Local Governments, and Fiscal Organization; 4. Committee on Fundamental Rights; 5. Committee for the Environment, Rights of Nature, Common Natural Assets, and Economic Model; 6. Committee for Justice Systems, Autonomous Controlling Bodies, and Constitutional Reform; 7. Committee for Knowledge-based Systems, Cultures, Science, Technologies, Arts, and Heritage.

11. Proposal of the Constitutional Convention: «Article 1. Chile is a social and democratic State, governed by the rule of law. It is plurinational, intercultural, regional, and ecological [...]. It recognizes as intrinsic and absolute values the dignity, freedom, and substantive equality of human beings and their indissoluble relationship with nature [...]. Article 8. Individuals and peoples and nature are interdependent, and together form an inseparable whole. The State recognizes and promotes living well as a relationship of harmonious balance between people, nature, and the organization of society».

current constitutional text to a coexistence between it and the eco-centric approach, which is embodied in the enshrinement, on the one hand, of the right to live in a healthy environment and, on the other hand, of the rights of nature.¹²

By «structural ecological axis», we mean the norms that address the «ecological issue» in the text of various chapters of the new Constitution, in terms of principles (progressivity, precaution, prevention, environmental justice, intergenerational solidarity, responsibility, and fair climate action); rights (human right to sufficient, healthy, acceptable, affordable, and accessible water and sanitation—it is the duty of the State to guarantee this for present and future generations; the right to a vital minimum of affordable and safe energy; the right to a healthy and ecologically balanced environment; the right to clean air throughout their life cycle; and rights of access to environmental matters: Participation, Information, and Justice); and duties (specifically, Nature has rights, which the State and society have the duty to protect and respect; the State has the duty to take action to prevent, adapt, and mitigate the risks, vulnerabilities, and effects caused by the climate and ecological crisis; the State must promote dialogue, cooperation, and international solidarity to adapt, mitigate, and confront the climate and ecological crisis and protect nature; the State has a special duty of stewardship over natural common assets, in order to guarantee the rights of nature and the interests of present and future generations; and the State has a duty to conserve, preserve, and care for the continental, insular, and Antarctic marine and coastal ecosystems, promoting their various uses and associated vocations and ensuring their preservation, conservation, and ecological restoration in all cases).

The foregoing is also linked to the development of specific subjects, such as the status of water and minerals; the social and ecological function of property; as well as organic definitions. Regarding this last point, the definition of the environmental competencies of public agencies and bodies is noteworthy, in particular, in that it strengthened autonomy at the regional and borough level, which is necessary for improved environmental governance, to the extent that the human and economic capacities required to comply with the constitutional mandate entrusted to them are provided. In this sense, the proposed constitutional text also addressed the mechanisms to access justice in connection with environmental matters by defining the action for the protection of fundamental rights and nature, while at the same time creating the «Office of the Ombudsperson for Nature».

Nevertheless, many national and international specialists may question, with good reason, the relevance of trying to learn from an apparently failed process, given that

12. Proposal of the Constitutional Convention: «Article 127. 1. Nature has rights, which the State and society have the duty to protect and respect. 2. The State must adopt an ecologically responsible administration and promote environmental and scientific education through permanent training and learning processes».

in the referendum the proposed Constitution was rejected by 62%. The answers to the above can be found in the broad consensus on the need for a new way of approaching the «ecological issue» that is consistent with the planet's current state, which would allow us to consider that this is a value shared by Chilean society. At the same time, it is important to highlight that the rejection of the text proposed by the Constitutional Convention in the referendum of September 2022 does not bury the constituent process which, at the time of writing this foreword, is being reactivated as a result of a new political agreement: the «Agreement for Chile». The latter—confirming the perspective expressed in the proposed new Constitution— calls for a constitutional reform that includes «the care and conservation of nature and biodiversity» in its Constitutional Bases.

In conclusion, the proposal concerning the constitutional treatment of the relationship between society and nature inserted in the text of the «new Constitution» can be considered, in the opinion of this author, as the civilizing minimum to address the critical environmental and climatic situation of the next fifty years in a particularly vulnerable country such as Chile.

Reference

ESBORRÁS, David Fabio (2016). «El modelo ecológico alternativo latinoamericano entre protección del derecho humano al medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la naturaleza». *Revista Derecho del Estado*, 36: 93-129 DOI: [10.18601/01229893.n36.04](https://doi.org/10.18601/01229893.n36.04).

About the author

PILAR MORAGA SARIEGO is a full professor at the School of Law of Universidad de Chile, director of the Center for Environmental Law and deputy director of the Universidad de Chile's Center for Climate Science and Resilience Research (CR)². Attorney-at-law, Universidad de Chile. Master's Degree in International and Community Law from the Université Lille 2-France and a PhD in Law from the same university. Her email is pmoraga@derecho.uchile.cl.  <https://orcid.org/0000-0001-8847-8559>.

EDITORIAL

Constituição Ecológica. Aprendendo com o processo constituinte chileno

Pilar Moraga Sariego 

Diretora

O processo constituinte iniciado após o «Acordo de Paz e a Nova Constituição» alcançado no Congresso Nacional do Chile em 15 de novembro de 2019, iniciou o debate para a elaboração de uma «Constituição Ecológica» no país, a partir da qual é possível coletar lições importantes sobre como abordar a «questão ambiental» no século XXI. Estas são bases mínimas que será preciso ter em mente na hora da elaboração de uma nova Constituição.¹³

A esse respeito, vale ressaltar que essa denominação: «Constituição Ecológica», obedece a uma característica regional latino-americana (Colômbia, Equador, Bolívia) que certos autores consideraram «um modelo alternativo» (Esbarras, 2016). No caso chileno, isso se explica pelo tratamento da relação entre os seres humanos e seu meio ambiente no processo constituinte e no texto da «nova Constituição» submetido a plebiscito em setembro de 2022.

«De fato, de acordo com os dados coletados pelo Observatório Ambiental Constitucional, dos 155 constituintes eleitos, 122 levantaram em seus programas alguma proposta relacionada à proteção ou cuidado do meio ambiente, da natureza, de seus elementos, dos ecossistemas e de sua interação com os seres humanos. Por sua vez, a Convenção Constitucional, declarou, antecipadamente, estar em «Estado de Emergência Climática¹⁴ e Ecológica», declaração que foi aprovada por 137 votos de um total de 155. Esta iniciativa, promovida pelos eco-constituintes convencionais, propôs em primeiro lugar: «Reconhecer que a nova Constituição está escrita num contexto de Emergência Climática e Ecológica», que deve ser levada em consideração em todas as comissões e propostas que forem elaboradas. Ao mesmo tempo, propõe «imple-

13. O texto está disponível em <https://bit.ly/3hDul9D>.

14. O site do Observatório está disponível em <https://bit.ly/3FFUmwS>.

mentar plenamente a petição da Convenção Constitucional Sustentável, aderido por 118 convenções em exercício, a fim de salvaguardar que a Convenção Constitucional seja sustentável em seu funcionamento». O exposto fez com que as sete comissões tivessem que abordar essa questão de maneira transversal, o que pode ser considerado a ¹⁵primeira lição aprendida com o processo constituinte chileno,¹⁶ ao reconhecer que a «questão ecológica» não pode ser considerada isoladamente de outras questões. Assim, por exemplo, assumiu-se que o equilíbrio ecológico é uma condição para o exercício de outros direitos, ao mesmo tempo em que o tipo de organização do Estado é decisivo na efetividade da proteção ambiental e da natureza. Isso traria consigo uma consequência importante para a proposta constitucional, pois, como analisaremos mais adiante, a «questão ecológica» era um eixo transversal no texto submetido ao plebiscito.

Ao mesmo tempo, o mecanismo decisório em duas instâncias: as comissões e o plenário, após ouvir terceiros que solicitaram ser ouvidos, permitiram polir os primeiros textos, caracterizados pelo grande detalhamento das regras elaboradas, redundâncias e falta de efeito concreto, para fins de proteção, gestão ou tratamento da «questão ambiental». A rejeição das propostas apresentadas pela Comissão do Meio Ambiente no plenário permitiu uma melhoria substancial em termos de coerência e eficácia regulamentares.

Quanto ao próprio texto proposto pela Convenção Constitucional, é possível destacar uma segunda lição referente ao desenvolvimento de um «núcleo ecológico», que encontra sua concretização em um conjunto de normas que constituem um «eixo ecológico transversal», a terceira lição aprendida que podemos destacar.

Por «núcleo ecológico», nos referimos ao reconhecimento do «ecológico» como um elemento que caracteriza o Estado do Chile, que reconhece a interdependência dos seres humanos e a natureza e promove a sua relação harmoniosa e o bem viver.¹⁷

15. Isto está na Sessão 27º, 5 de outubro de 2021. O texto está disponível em <https://bit.ly/3VgQLuT>.

16. 1. Sistema Político, Governo, Poder Legislativo e Sistema Eleitoral; 2. Princípios Constitucionais, Democracia, Nacionalidade e Cidadania; 3. Comissão da Forma do Estado, Planejamento, Autonomia, Descentralização, Equidade, Justiça Territorial, Governos Locais e Organização Fiscal; 4. Comissão dos Direitos Fundamentais; 5. Comissão do Meio Ambiente, Direitos da Natureza, Bens Naturais Comuns e do Modelo Econômico; 6. Comissão dos Sistemas de Justiça, Órgãos Autônomos de Controle e Reforma Constitucional; 7. Comissão dos Sistemas de Conhecimento, Culturas, Ciência, Tecnologia, Artes e Patrimônio.

17. Proposta da Convenção Constitucional: «Artigo 1. Chile é um Estado social e democrático de direito. É plurinacional, intercultural, regional e ecológico. (...) Reconhece como valores intrínsecos e inalienáveis a dignidade, a liberdade, a igualdade substantiva dos seres humanos e a sua relação indissolúvel com a natureza (...). Artigo 8.º - As pessoas e os povos são interdependentes da natureza e formam com ela um todo inseparável. O Estado reconhece e promove o bem viver como uma relação de equilíbrio harmonioso entre as pessoas, a natureza e a organização da sociedade.

Com isso, passamos da preeminência da abordagem antropocêntrica, no atual texto constitucional, para uma convivência entre esta e a abordagem egocêntrica, que se materializa na consagração, por um lado, do direito a viver em um ambiente saudável e, por outro lado, dos direitos da natureza.¹⁸

Por «eixo ecológico estrutural» entendemos as normas que abordam a «questão ecológica» nos vários capítulos do texto da nova Constituição, em termos de: *princípios* (progressividade, precaução, prevenção, justiça ambiental, solidariedade intergeracional, responsabilidade e ação climática justa”; *direitos* (Direito humano a água e saneamento suficiente, saudável, aceitável, econômico e acessível. É dever do Estado garantir isso para as gerações atuais e futuras. Direito a um mínimo vital de energia acessível e segura. Direito a um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. Direito ao ar puro durante todo o seu ciclo de vida. Direitos de acesso em matéria ambiental: Participação, Informação e Justiça) e *deveres* (a Natureza tem direitos. O Estado e a sociedade têm o dever de protegê-los e respeitá-los. É dever do Estado adotar ações para prevenir, adaptar e mitigar os riscos, vulnerabilidades e efeitos causados pela crise climática e ecológica. O Estado deve promover o diálogo, a cooperação e a solidariedade internacional para adaptar, mitigar e enfrentar a crise climática e ecológica e proteger a natureza. O Estado tem um dever especial de custódia sobre os bens comuns naturais, a fim de assegurar os direitos da natureza e o interesse das gerações presentes e futuras. É dever do Estado conservar, preservar e cuidar dos ecossistemas marinhos e costeiros continentais, insulares e antárticos, promovendo as diversas vocações e usos a eles associados e assegurando, em qualquer caso, a sua preservação, conservação e restauração ecológica). O acima exposto também está ligado ao desenvolvimento de assuntos específicos, tais como: O estatuto da água e dos minerais, a função social e ecológica da propriedade, bem como as definições orgânicas. Em relação a este último ponto, podemos destacar a definição das competências ambientais dos órgãos do Estado, em particular, o reforço da autonomia ao nível da região e do bairro, que é necessário para uma melhor governação ambiental, na medida em que proporciona as capacidades humanas e econômicas para o cumprimento do mandato constitucional conferido. Nesse sentido, o texto constitucional proposto também abordou os mecanismos de acesso à justiça em matéria ambiental, definindo a ação de proteção dos direitos fundamentais e da natureza, ao mesmo tempo em que criou a «Defensoria da Natureza».

Agora, muitos especialistas da mídia nacional e internacional podem ser questionar, com razão, sobre a relevância de tentar aprender com um processo «aparente-

18. Proposta da Convenção Constitucional: Artigo 127.- 1. A natureza tem direitos. O Estado e a sociedade têm o dever de protegê-los e respeitá-los. 2. O Estado adotará uma administração ambientalmente responsável e promoverá a educação ambiental e científica através de processos de aprendizagem e formação permanentes».


mente fracassado», dada a rejeição da proposta constitucional no plebiscito por 62%. As respostas ao exposto acima podem ser encontradas no amplo consenso sobre a necessidade de ter um novo tratamento da «questão ecológica», que seja consistente com a atual situação planetária, o que pode nos permitir considerar que é um valor compartilhado pela sociedade chilena. Ao mesmo tempo, é necessário ressaltar que a rejeição do texto proposto pela Convenção Constitucional no plebiscito de setembro de 2022 não enterra o processo constituinte, que no momento em que este editorial está sendo escrito, é reativado, resultado de um novo acordo político: «Acordo para o Chile». Este último, confirmando a perspectiva que se refletiu na proposta de «nova Constituição», propõe uma reforma constitucional que contenha «o cuidado e a conservação da natureza e da biodiversidade» em suas Bases Constitucionais.

A título de conclusão, é possível afirmar que a proposta relativa ao tratamento constitucional da relação entre sociedade e natureza, inserida no texto da «nova Constituição», pode ser considerada, na opinião deste autor, como o mínimo civilizacional para enfrentar a crítica situação ambiental e climática dos próximos cinquenta anos, de um país particularmente vulnerável como o Chile.

Referência

ESBORRÁS, David Fabio (2016). «El modelo ecológico alternativo latinoamericano entre protección del derecho humano al medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la naturaleza». *Revista Derecho do Estado*, 36: 93-129 DOI: [10.18601/01229893.n36.04](https://doi.org/10.18601/01229893.n36.04).

Sobre a autora

PILAR MORAGA SARIOGO é professora titular da Faculdade de Direito da Universidade do Chile, diretora do Centro de Direito Ambiental e vice-diretora do Centro de Ciência Climática e Resiliência da Universidade do Chile (CR)². Advogada pela Universidade do Chile. Mestrado em Direito Internacional e Comunitário pela Universidade de Lille2-França e doutora em Direito pela mesma universidade. Seu e-mail é pmoraga@derecho.uchile.cl.  <https://orcid.org/0000-0001-8847-8559>.

La *Revista de Derecho Ambiental*, del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es un espacio de exposición y análisis en el plano académico del derecho ambiental. Su contenido se presenta a través de doctrina, jurisprudencia y reseñas, y aborda diversas materias relacionadas con la gestión, institucionalidad y herramientas de protección ambiental y desarrollo sustentable. Se presentan artículos de diferentes autores y autoras en los que se analizan y abordan casos y temas jurídico-ambientales de creciente interés y actualidad.

DIRECTORA

Pilar Moraga Sariego

EDITOR

Jorge Ossandón Rosales

SITIO WEB

revistaderechoambiental.uchile.cl

CORREO ELECTRÓNICO

revistada@derecho.uchile.cl

LICENCIA DE ESTE ARTÍCULO

Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional



La edición de textos, el diseño editorial
y la conversión a formatos electrónicos de este artículo
estuvieron a cargo de Tipografía
(www.tipografica.io)